

ESTRATEGIAS CAMPESINAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL El caso de las Tierras Altas Jujeñas, Argentina

PEASANT SOCIAL REPRODUCTION STRATEGIES
The case of the Highlands Jujeñas, Argentina

CARLOS COWAN ROS

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CAPES PEC-PG), Brasil
cowanros@agro.uba.ar

SERGIO SCHNEIDER

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Brasil.
schneide@ufrgs.br

RESUMEN

Este artículo analiza la persistencia del campesinado en un contexto de profundización de las relaciones capitalistas de producción, que se caracteriza por la difusión de las políticas neoliberales en los países periféricos. El caso empírico estudiado es la crisis y la reconversión de las estrategias de reproducción social de los campesinos de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca, Argentina. El artículo analiza las nuevas estrategias económicas campesinas, centrándose en las lógicas de acumulación y conversión de capitales. Se propone que la reconversión productiva se ha orientado hacia el fortalecimiento de las actividades típicamente campesinas—agropecuarias y artesanales—y que, frente a la decapitalización, el principal mecanismo seguido fue la acumulación de capital social para su posterior conversión en otros tipos de capitales. Sin embargo, la implementación de estas estrategias ha sido condicionada por factores estructurales y sociales que dificultan la consolidación de una agricultura comercial de base campesina en dichas regiones.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Capital social, Conversión de capitales, Neoliberalismo, Reconversión productiva.

ABSTRACT

This article analyzes peasantry persistence in a context of deepening of the capitalist relations of production, as given by the diffusion of neoliberal policies in periphery countries. The case study focuses on crisis and recreation of peasant's social reproduction strategies in the Puna and Quebrada de Humahuaca, Argentina. The article analyzes the new economic strategies of peasantry, focusing on its logics of accumulation and conversion of capitals. Results suggests that the productive conversion was oriented towards strengthening typical peasant activities such as farming and handicraft production—whereas the main followed mechanism against decapitalisation was the accumulation of social capital for its further conversion in other types of capitals. Nevertheless, the implementation of these strategies has been conditioned by structural and social factors that make difficult the consolidation of a commercial agriculture in peasant systems in these regions.

ADDITIONAL KEYWORDS

Conversion of capitals, Neoliberalism, Productive transformation, Social capital.

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XX las relaciones capitalistas de producción se han desarrollado y expandido, transformando a las sociedades. En las últimas décadas, este proceso se ha profundizado con la difusión de las políticas neoliberales, frente a lo cual diferentes formaciones sociales han debido redefinir sus estrategias de reproducción.

En Argentina, las políticas neoliberales produjeron la transformación acelerada de la base económica del país. Este proceso superó la capacidad de adaptación de parte de la población, que pasó a estar excluida crónicamente del mercado laboral y vio deteriorarse su calidad de vida. Tal fenómeno se expresó con especial énfasis en las regiones periféricas, integradas marginalmente al sistema socioeconómico y, en particular, en las áreas rurales de base campesina.

La crisis y reconversión de las estrategias de reproducción social del campesinado de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca es un caso interesante para analizar la relación entre la persistencia de la formación social campesina y las recientes transformaciones del capitalismo en un país periférico como Argentina. Ambas regiones se caracterizan por ser una de las zonas rurales del país con menor penetración de la agricultura capitalista y mayor presencia campesina. En 2002, el 88% de las explotaciones agropecuarias correspondían a unidades campesinas de subsistencia (Obschatko y otros, 2006: 55).

En la primera mitad del siglo XX, el campesinado de esas regiones fue incorporado parcialmente al mercado de trabajo a medida que se desarrollaba la industrialización nacional, en el marco del *modelo de sustitución de importaciones*. La estrategia económica del grupo doméstico se basó en la complementación de los ingresos provenientes de la venta de mano de obra con la producción agropecuaria. En los años 70, la difusión de las políticas neoliberales evidenciaron el cambio del modelo económico nacional. La transformación de la estructura económica del país y, en particular, el retraimiento del mercado laboral, produjeron la crisis de las estrategias de reproducción social de las familias campesinas. En una coyuntura en la que llegó a peligrar la subsistencia del grupo doméstico, los campesinos debieron redefinir sus estrategias económicas, orientándolas hacia la intensificación de las actividades típicamente campesinas —producción agropecuaria y artesanal.

La relación entre el modo de producción capitalista y las formaciones sociales no capitalistas, en particular la campesina, ha sido ampliamente estudiada y debatida en las ciencias sociales. La *teoría de la diferenciación*, que postula la desaparición del campesinado como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, ha sido cuestionada frente a la evidencia empírica de la persistencia de esa formación social. De este modo, han surgido nuevas tesis que tratan de explicar la vigencia de las formas de producción familiar en el capitalismo avanzado. Algunos autores, entre los que destacan Mann (1990: 30) o Goodman, Sorj y Wilkinson (1990: 1), explican ese fenómeno por los obstáculos que opone al capital la naturaleza biológica de la producción agropecuaria.

Por su parte, Servolin (1989) y Friedmann (1978: 559) lo refieren a la especificidad del trabajo familiar en la producción simple de mercaderías.

Esas teorías son importantes para analizar las características de la producción agropecuaria en el capitalismo. Sin embargo, como manifiesta Shanin (1980: 68), para comprender la lógica de la reproducción campesina en el modo de producción capitalista es necesario incorporar al análisis las características de la unidad de producción —la familia— y la especificidad histórica de la sociedad de la que forma parte.

En consonancia con esa perspectiva, este artículo analiza la crisis y redefinición de las estrategias económicas campesinas en la transición del *modelo de sustitución de importaciones al neoliberal*. Nos interesa comprender cómo el campesinado consigue reproducirse en un contexto de profundización de las relaciones capitalistas de producción. Entendemos por *campesino* las formaciones sociales de trabajo y producción que poseen una economía de subsistencia de base agropecuaria. Se caracterizan por tener la explotación agraria como unidad básica de producción y medio de vida; una organización familiar del trabajo, siendo multifacético el padrón ocupacional; y un relativo control de los medios de producción, en un contexto de subordinación a la economía general. Los campesinos también se caracterizan por poseer determinados valores, tradiciones y normas que rigen su vida en comunidad y su cultura.

Este artículo forma parte de una serie de investigaciones realizadas en las regiones de la Puna jujeña y de la Quebrada de Humahuaca (Cowan Ros, 1999, 2003 y 2006). El trabajo de campo fue realizado en los años 1997, 2002 y 2005. El método de investigación es el cualitativo y las estrategias de recolección de datos fueron la observación y la realización de entrevistas a diferentes actores del territorio¹.

EL SISTEMA DE ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL COMO CONCEPTO ANALÍTICO DE LAS LÓGICAS DE SUBSISTENCIA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS

El concepto de *sistema de estrategias de reproducción social*, propuesto por Pierre Bourdieu, se constituye en un instrumento analítico de interés para interpretar “el conjunto de estrategias a través de las cuales la familia busca reproducirse biológicamente y, sobre todo, socialmente, es decir, reproducir las propiedades que le permiten conservar su posición social” (Bourdieu, 1990: 87).

¹ Se optó por el método cualitativo por ser apropiado para captar la subjetividad de los actores, en particular su definición de la situación y de sus estrategias. En el trabajo de campo se realizaron sesenta y nueve entrevistas individuales y nueve grupales a campesinos, miembros y no miembros de organizaciones sociales, de ambas regiones. También se entrevistó a: quince técnicos de ONG's y de programas sociales públicos y a ocho representantes políticos locales (alcaldes, dirigentes partidarios y concejales). Adicionalmente, se participó en doce eventos (sociales, organizativos, productivos y políticos) de las organizaciones campesinas y de artesanos.

La familia es el sujeto de las estrategias de reproducción social, pues por un lado, es el núcleo a partir del cual sus miembros articulan acciones para garantizar su reproducción física y social, y por otro, es el ámbito donde se forman las disposiciones primarias de los agentes, es decir, el *habitus*, que se constituye en el principio de acción de sus prácticas sociales y, por lo tanto, de sus estrategias (Bourdieu, 1994: 10).

Así, las acciones que ejecutan los agentes a fin de reproducir su posición social pueden ser aprehendidas a través de la noción de *estrategia*, entendida como “las líneas de acción objetivamente orientadas que los agentes sociales construyen continuamente en la práctica y que se definen en el encuentro entre el *habitus* y una coyuntura particular del campo” (Bourdieu, 1995: 89).

Para sistematizar el análisis de las estrategias se las puede clasificar en: i) *estrategias de inversión biológica*, entre las cuales se encuentran las estrategias de fecundidad, matrimoniales y de profilaxis; ii) *estrategias de sucesión*, que buscan la transmisión del patrimonio familiar entre las generaciones; iii) *estrategias educativas*, que comprenden las estrategias escolares y las éticas que constituyen la esfera moral de la familia; iv) *estrategias de inversión económica*, orientadas a la perpetuación del capital en sus diferentes especies y v) *estrategias de inversión simbólica*, que constituyen las acciones tendientes a conservar y aumentar el capital de reconocimiento y a favorecer la reproducción de los esquemas de percepción y apreciación más favorables al grupo familiar (Bourdieu, 1994: 5-6).

La convertibilidad de los diferentes tipos de capitales es el mecanismo básico de las estrategias de reproducción social. Capital es un conjunto de bienes específicos, que constituyen una fuente de poder. Entre las diferentes especies de capital se encuentran las siguientes: i) el *económico*, entendido como cualquier tipo de bien directamente convertible en dinero; también institucionalizado en la forma de derechos de propiedad; ii) el *cultural*, que puede existir en tres estados: incorporado (disposiciones, habilidades y capacidades del cuerpo y de la mente), objetivado (bienes culturales) e institucionalizado (títulos académicos); iii) el *social*, entendido como la capacidad de los agentes de movilizar recursos a partir de su red de relaciones sociales y iv) el *simbólico*, comúnmente llamado prestigio, reputación o renombre (Bourdieu, 1986: 243).

Con este referencial teórico se aborda el objeto de estudio del presente trabajo. Por cuestiones de espacio, el análisis se centra en las lógicas —mecanismos de acumulación y conversión de capitales— que implementan las familias campesinas para viabilizar sus nuevas estrategias económicas y en el papel que juegan en ese proceso las estrategias de inversión simbólica.

En la siguiente sección se recupera la trayectoria de las estrategias de reproducción social del campesinado en el territorio y la modalidad de integración con el resto de la sociedad, hasta la crisis de esa lógica de reproducción en la década de 1990. Con esa contextualización histórica, en la cuarta sección se analiza cómo fueron definidas e implementadas las nuevas estrategias económicas. En la última sección se analiza cómo los campesinos articulan las estrategias de inversión simbólica y las económicas para garantizar su reproducción social.

LAS TIERRAS ALTAS JUJEÑAS Y SU INFLUENCIA EN LAS TRAYECTORIAS PRODUCTIVAS CAMPESINAS

Las *tierras altas jujeñas*, el territorio donde se localiza el objeto de estudio, comprenden dos regiones andinas: la *Puna*, meseta de altura situada entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, y la *Quebrada de Humahuaca*, valle de altura y de transición entre la Puna y el sur de la provincia, que se extiende entre los 600 y 3.700 metros sobre el nivel del mar. Ambas regiones están localizadas en el norte de la provincia de Jujuy, noroeste de Argentina² y tienen un clima frío y seco, que impone restricciones a la instalación humana y a la realización de actividades agropecuarias³. En 2001, aproximadamente 71 mil personas habitaban la zona de estudio. El 47% residía en el ámbito rural, distribuidos en pequeñas aldeas, de 30 familias en promedio, y el 53% en seis ciudades de menos de 14 mil habitantes (INDEC, 2006).

La realidad social que presenta actualmente el territorio ha sido modelada a lo largo de la historia por las visiones de mundo dominantes que, a través de las políticas públicas, han condicionado sus posibilidades de desarrollo, las estrategias de reproducción social y la calidad de vida de sus habitantes⁴. Una breve recuperación de la trayectoria de las estrategias económicas de los campesinos otorgará elementos de análisis para comprender las lógicas con las cuales han enfrentado la crisis de sus estrategias de reproducción social en los 90.

Del *ayllu* andino a la emergencia de un campesinado de origen indígena

Con anterioridad a la colonización hispánica, las sociedades indígenas que habitaban el territorio garantizaban su reproducción social a través del sistema de organización sociopolítico denominado *ayllu*. El *ayllu* ocupaba un espacio delimitado en el cual existían intrincadas relaciones de parentesco y reciprocidad. Los nativos se organizaban en torno a una asamblea que, entre otras funciones, planificaba el trabajo y el uso de los recursos, resolvía los conflictos internos y se articulaba con otras comunidades (Isla, 1992: 173).

La comunidad satisfacía sus necesidades a través de la producción agropecuaria y artesanal, y obtenía los bienes que no producía a través del intercambio con otros *ayllus*.

² La superficie de Jujuy es de 52.219 km² (el 1,9% de la superficie continental de Argentina). El Censo Nacional de Población de 2001 contabilizó 611.484 habitantes en la provincia (el 1,68% de la nacional). El territorio de estudio limita al norte con Bolivia y al oeste con Chile, comprende una superficie de 38.424 km², (el 72% de la superficie provincial) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC–, 2006).

³ En el territorio no existe periodo libre de heladas y las precipitaciones anuales son inferiores a los 300 mm, siendo más húmeda la Quebrada de Humahuaca que la Puna. La agricultura sólo se practica bajo riego y en verano. Este ambiente contrasta con el sur de la provincia (las *tierras bajas*) que presenta, un relieve levemente ondulado y un clima cálido y húmedo.

⁴ En 2001, la población del territorio con necesidades básicas insatisfechas oscilaba entre 29% y el 46,1% según la jurisdicción considerada, siendo de 28,8% para la provincia y de 17,7% para el país (INDEC, 2006).

Así, las desventajas del ambiente andino fueron superadas por la organización social y económica, caracterizada por la verticalidad del modelo de control de los recursos, teniendo la reciprocidad y la redistribución como principios fundamentales de la producción y la circulación de bienes (Karasik, 1984: 52).

La descomposición del *ayllu* comenzó en la segunda mitad del siglo XVI, con la colonización de los Andes Centrales. En el inicio tal descomposición se produjo a través de mecanismos coactivos como la expropiación de las tierras y la incorporación forzosa de los nativos a la *encomienda*, derechos de vasallaje sobre los indígenas que habitaban las tierras —*mercedes reales*— que eran adjudicadas por la corona en usufructo a un conquistador. Posteriormente, ocurrió por medio de mecanismos simbólicos de dominación como la imposición de la cosmovisión occidental a través de la religión católica y la legislación. Conformada la Nación Argentina en las primeras décadas del siglo XIX, el gobierno de la provincia de Jujuy reconoció el derecho de propiedad a los antiguos poseedores de las *mercedes reales* y completó el proceso de privatización de las *tierras altas* jujeñas. Los indígenas no fueron desplazados. Sin embargo, los latifundistas hicieron uso del derecho a cobrar arrendamiento a los nativos (Madrazo, 1981: 215).

El *ayllu*, como unidad de organización y reproducción social, terminó por desintegrarse en las últimas décadas del siglo XIX, dando lugar al surgimiento de un campesinado de origen indígena cuyas estrategias de reproducción pasaron a definirse en el grupo doméstico. Su subsistencia se basaba en la producción agropecuaria y artesanal destinada al autoconsumo y al pago del arrendamiento (Madrazo, 1981 y Rutledge, 1987).

El papel del campesinado andino en el desarrollo industrial

A finales del siglo XIX y comienzos del XX tuvo lugar la integración y especialización productiva entre las diferentes regiones del país, siendo dominante la lógica centro-periferia. En ese marco comenzó a consolidarse el *modelo de sustitución de importaciones*, a través del cual el Estado promovió el desarrollo industrial con la sanción de políticas proteccionistas y la transferencia de divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias. En Jujuy el polo económico se situó en el sur de la provincia, donde estaban las principales ciudades y dos ingenios azucareros⁵. En las *tierras altas* la actividad económica se circunscribió a tres complejos mineros. Por su posición geográfica periférica y por no ser consideradas rentables para la actividad agropecuaria, no fueron priorizadas en las políticas públicas de inversión (Rutledge, 1987: 196-204).

La demanda de operarios en los ingenios azucareros se duplicaba en la época de cosecha —*zafra*—, realizada en forma manual, sin poder cubrirla con los residentes

⁵ Los ingenios azucareros son grandes complejos de producción de azúcar, constituidos por un sector de plantación y otro de fabricación. A fines del siglo XIX, capitales extranjeros instalaron dos ingenios azucareros en la provincia de Jujuy y uno en la vecina provincia de Salta. En la década de 1930, la producción de azúcar de esas usinas abastecía el consumo nacional y generaba excedentes exportables (Rutledge, 1987: 190).

locales. Para satisfacer ese déficit los empresarios compraron grandes extensiones de tierra a los antiguos latifundistas de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca con el fin de cobrar a los campesinos el arrendamiento en forma de trabajo en los ingenios (Rutledge, 1987: 199). Kindgard (1987: 18) manifiesta que una lógica similar tuvieron los empresarios mineros para abastecerse de operarios.

Entre 1915 y 1930, los campesinos *puneños* y *quebradeños* fueron obligados a entrar en el mercado de trabajo como cosechadores de caña de azúcar o como mineros. En otros casos, migraron a las principales ciudades del país para trabajar en las fábricas que surgían en el contexto del desarrollo industrial o se emplearon en las instituciones públicas locales. Así, se produjo un cambio en sus estrategias de reproducción social. La venta de mano de obra pasó a convertirse en la principal fuente de ingresos del grupo doméstico, lo cual, en la mayoría de los casos, supuso la migración temporera o definitiva de parte o de todos los miembros. Las *tierras altas jujeñas* pasaron a ocupar el papel de (re)productoras de mano de obra poco cualificada en el modelo de desarrollo vigente (Isla, 1992: 200).

Las familias que pasaron a residir en los complejos mineros o en las ciudades, se proletarizaron y perdieron el vínculo con las actividades agropecuarias. Las que migraban temporalmente (de mayo a octubre) a la cosecha de caña de azúcar retornaban a su comunidad durante el verano, y a través de la producción agropecuaria complementaban los ingresos obtenidos en el ingenio. El modelo de integración parcial de los campesinos al mercado de trabajo respondía a los intereses de los empresarios, pues permitió el abastecimiento de mano de obra a un costo inferior al valor de su reproducción. Esto fue posible porque operó la coacción sobre el campesinado, amparada en el derecho de propiedad de las tierras, y porque se delegó en los trabajadores el costo de su reproducción fuera del periodo de cosecha (Rutledge, 1987: 209).

La producción doméstica se basaban en la complementariedad del cultivo bajo riego de hortalizas, cereales y/o frutales con una ganadería de trashumancia (ovejas, llamas y cabras). Las diferencias ecológicas, en particular la disponibilidad de agua, promovían una especialización regional, siendo la ganadería la principal actividad en la Puna y la agricultura en la Quebrada. La mayor parte de los bienes de producción eran fabricados en la unidad doméstica, siendo prácticamente nula la mecanización y la utilización de agroquímicos en el proceso productivo. Los campesinos del territorio, al no ser concebidos como productores agropecuarios por los diferentes gobiernos, fueron marginados de las políticas que fomentaron la modernización tecnológica del agro o “revolución verde”.

La comercialización de productos agropecuarios no era relevante, restringiéndose a la venta esporádica de excedentes en momentos de necesidad de efectivo. Sin embargo, el trueque intra e intercomunitario tenía un papel importante para acceder a bienes no producidos (Karasik, 1984: 88).

El ámbito social comunitario, ya no como *ayllu* sino como espacio de residencia y sociabilidad, continuó siendo un componente relevante de las estrategias de reproducción social. Se evidencia en la persistencia de instituciones comunitarias, originarias en el *ayllu*, que continuaron, en parte, rigiendo las relaciones de producción, distribución e intercambio durante el siglo XX (Isla, 1992: 171).

Un caso emblemático eran las estrategias de sucesión, como el derecho al uso de la tierra. Si bien las familias no poseían el título de propiedad de las tierras, existían instituciones comunitarias que rigen su distribución y uso. Cada familia tenía derecho a un lote en la zona de riego (inferior a una hectárea) y a una superficie mayor en la zona de pastoreo. El derecho a residir y a hacer uso de la tierra de la comunidad lo otorgaba haber nacido o casarse con algún integrante de la comunidad. La tierra no escaseaba en la mayoría de las comunidades debido a la pequeña superficie cultivada y a la baja presión demográfica como consecuencia de los continuos flujos migratorios⁶.

La disponibilidad de agua era la principal limitante para las actividades agropecuarias. Las familias de cada comunidad, en *asamblea*, planificaban su uso y distribución en función de la oferta anual y de las necesidades de cada grupo doméstico. Este espacio decisorio también era accionado para resolver conflictos comunitarios, organizar las fiestas patronales, destinar una parcela de tierra a una pareja de jóvenes que se constituían en matrimonio, entre otros aspectos.

La organización del trabajo en la unidad productiva era eminentemente familiar y estaba supeditada a aquellos agentes que no emigraban, por lo general mujeres, niños y ancianos, y a los varones adultos en los periodos de residencia en la aldea.

En la década de 1940, los nativos protagonizaron insurrecciones reivindicando la devolución de sus tierras, lo que implicaba el fin del pago de los arrendamientos en forma de trabajo a los empresarios mineros y azucareros. En 1949, el gobierno nacional expropió 58 estancias del territorio, casi la totalidad de las tierras en posesión privada, y otorgó, por una generación, el derecho de usufructo a los nativos (Rutledge, 1987: 218). Si bien finalizó la coacción de los empresarios sobre los campesinos, la emigración a la *zafra* continuó. Entre los diferentes factores que explican este fenómeno destacan: la dificultad de garantizar la subsistencia familiar únicamente con la producción agropecuaria; la elevación de los salarios de los trabajadores rurales, desde que se extendieron en la década de 1940 los derechos laborales del ámbito urbano al rural; y la valoración del salario como fuente de ingreso y sustento.

La emigración para la venta de mano de obra se constituyó en el medio de los campesinos para garantizar su subsistencia y, por tanto, en el pilar de sus estrategias económicas. La entrada al mercado de trabajo significó: i) la redefinición del papel de la producción doméstica —agropecuaria y artesanal— en la economía familiar, que de ser la principal fuente de sustento pasó a concebirse como un complemento del salario, ii) el debilitamiento de los vínculos familiares y comunitarios como consecuencia de la migración y iii) la incorporación creciente de bienes de consumo de origen industrial (alimento, ropa, etc.), que pasaron a sustituir parte de los producidos en el ámbito doméstico y a significar una nueva fuente de gasto.

⁶ La densidad poblacional varía de 5,6 hab./km² en el distrito más densamente poblado a 0,4 hab./km² en el de menor densidad (INDEC, 2006).

NEOLIBERALISMO Y CRISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL CAMPESINAS

Mediada la década de 1970 comenzó en Argentina la ejecución de políticas neoliberales que promovieron la liberalización económica y la reducción de la intervención estatal. Esto supuso un cambio en el modelo de desarrollo vigente y una reestructuración de la economía nacional y de las regionales.

La sobrevalorización de la moneda y la reducción de la carga impositiva en las transacciones internacionales promovieron el retraimiento de la actividad industrial y, en consecuencia, la minera⁷. Se incrementó la importación de maquinaria que favoreció la mecanización de la cosecha de la caña de azúcar⁸. Ambos procesos se intensificaron en la década de 1990 con la radicalización de las políticas neoliberales. Como resultado se deprimieron los salarios y la demanda de mano de obra en los destinos tradicionales de migración de los campesinos del noroeste argentino (Reboratti, 1997: 229).

A partir de 1995 los índices económicos comenzaron a mostrar el agotamiento del nuevo modelo. En 2002, la crisis llegó a su máxima expresión. Tras cuatro años de recesión, la tasa anual de crecimiento de la economía se aproximó al - 11%. En mayo de ese año la tasa de desocupación de los principales aglomerados urbanos del país fue del 21,5% (INDEC, 2006).

La migración como estrategia de acceso a mercados laborales dejó de ser una alternativa para las familias campesinas. Aquellos agentes que migraban temporalmente a la cosecha de cultivos dejaron de hacerlo; familias que habían emigrado definitivamente a las minas o a las ciudades retornaron a sus aldeas al perder sus puestos de trabajo. En ese contexto las estrategias de reproducción social de las familias campesinas de la Puna y de la Quebrada de Humahuaca entraron en crisis. En el ámbito académico, este fenómeno motivó a algunos autores a hablar en términos de “crisis del mundo campesino” (Reboratti, 1997: 229) o del modelo de desarrollo (Isla, 1992: 200).

La reconversión productiva en las nuevas estrategias económicas

Las nuevas estrategias económicas que comenzaron a implementar los campesinos han sido la resultante de su disposición a la reproducción, de su estructura de capitales y de las oportunidades del contexto.

Las familias que retornaron a sus aldeas de origen centraron sus estrategias económicas en fortalecer la diversificación de sus fuentes de ingresos, complementando los provenientes de las actividades agropecuarias y no agropecuarias, tanto prediales como

⁷ A fines de los 80, dos de los tres complejos mineros del territorio dejaron de producir por problemas de rentabilidad. *El Aguilar*, el mayor complejo minero de la provincia y el segundo del país, redujo su planta de 1.500 trabajadores a, aproximadamente, un tercio de los mismos.

⁸ En 1991, apenas el 30% de la superficie nacional de caña de azúcar era cosechada a mano (Reboratti, 1997: 227).

extra-prediales. En la literatura científica este tipo de práctica se denomina *pluriactividad* (Sacco dos Anjos, 2001: 178)⁹.

La crisis en la economía doméstica supuso la necesidad de reconvertir el sistema productivo. Los campesinos comenzaron a incorporar incipientemente tecnología de origen industrial, principalmente plaguicidas, y a orientar su producción a la generación de excedentes para su comercialización. Este proceso lo iniciaron los campesinos del principal valle de la Quebrada de Humahuaca, en la década de 1970, favorecidos por mejores condiciones climáticas y de acceso a las vías de comunicación y por la apertura de un nicho de mercado en la capital provincial (Arzeno, 1998). Gradualmente se fue extendiendo al resto del territorio. Por lo general, esta estrategia fue seguida por familias de *ex-cañeros* que no habían perdido el vínculo con las actividades agropecuarias. Entre los ex-mineros y ex-asalariados urbanos, es decir, agentes cuyas trayectorias profesionales se habían distanciado de lo agropecuario, primó la disposición a radicarse en las ciudades locales a la espera de la reactivación del mercado laboral.

En un contexto de crisis y pauperización social, los recursos con los que han contado los campesinos para viabilizar su reconversión productiva se presentaron escasos. A los obstáculos económicos se deben sumar los ambientales, que limitan la productividad agropecuaria y sin financiamiento o sin una organización social apropiada son difíciles de superar.

La comercialización de los excedentes significó un desafío aún mayor, pues no sólo ha implicado el aumento de la productividad, altamente dependiente de la inversión en infraestructura e insumos —capital económico—, sino también la adquisición de habilidades productivas y comerciales —capital cultural. Por un lado, los productos factibles de ser comercializados no siempre son los consumidos por las familias, lo que supone la producción de nuevas especies y la incorporación de tecnología apropiada. Por otro, el mercado local se ha presentado reducido para absorber la creciente producción agropecuaria del territorio, lo cual deprimió los precios de los productos. Esto ha implicado la necesidad de comercializar en mercados externos (regionales y nacionales). Por último, la deficitaria infraestructura del territorio (vías de comunicación, mataderos habilitados para comercializar el ganado, etc.) ha sido otro obstáculo a superar.

Entre las otras fuentes de generación de ingresos se encuentran: i) la venta ocasional de mano de obra, ii) las actividades no agropecuarias (confección de artesanías, elaboración de conservas o quesos, extracción de minerales) y iii) la “ayuda social” —subsidios, créditos y/o insumos— provista por instituciones públicas y privadas a través de sus programas de asistencia social.

⁹ El análisis del papel de la *pluriactividad* en la agricultura familiar y en las políticas de desarrollo ha ganado relevancia en los últimos años entre los investigadores de la región. En el caso argentino, destaca el libro organizado por Neiman y Craviotti (2005) y en el brasilero, las investigaciones realizadas en el marco del *Projeto Rurbano* (www.eco.unicamp/rurbano) y por Sacco dos Anjos (2001 y 2003) y Schnedier (2003).

En los años 90, el Estado nacional y las entidades multilaterales internacionales destinaron recursos para financiar programas de promoción social, con el objetivo de contener a la población que quedaba excluida del mercado laboral. En el marco de la redefinición del papel del Estado, parte de la ejecución de esos programas fue tercerizada a ONG locales. En el territorio, esa política significó el surgimiento de las ONG y de instituciones públicas que comenzaron a ejecutar programas de asistencia y/o promoción social dirigidos a sectores sociales de escasos recursos (Cowan Ros, 2002: 43).

La “ayuda social” se convirtió en una fuente de ingresos complementaria para garantizar la subsistencia del grupo doméstico. Las familias han debido implementar diferentes estrategias para acceder efectivamente a ella. Uno de los mecanismos seguidos fue aprovechar la diversificación de la residencia de sus miembros para ampliar su red de relaciones sociales. Al mantener una residencia en la aldea rural y otra en las ciudades próximas, las familias mantienen la producción agropecuaria y aumentan sus oportunidades de conseguir empleos y de acceder a donaciones y créditos, pues se convierten en “población objetivo” de los programas del ámbito urbano y del rural.

EL PAPEL DEL CAPITAL SOCIAL EN LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

La estrategia más recurrente que han implementado las familias campesinas para acceder a los recursos que se les presentan escasos es la optimización del capital que tienen más fácilmente accesible, el capital social, para su posterior conversión en las otras especies de capital. Han invertido en la ampliación de su red de relaciones sociales para aumentar su capacidad de movilización de recursos.

La disminución de la emigración y la residencia permanente en las aldeas contribuyó al fortalecimiento de los vínculos sociales que se encontraban fragilizados tras décadas de continua emigración. La interacción diaria en el ámbito comunitario accionó la predisposición al intercambio de favores, lo cual constituyó un mecanismo fundamental para la implementación de las nuevas estrategias productivas. En un principio, esa movilización de recursos sociales fue producto del encuentro entre las disposiciones contenidas en el *habitus* nativo y un ambiente social propicio, el comunitario. En las aldeas que comenzaron a recibir apoyo de los mediadores sociales —técnicos de instituciones públicas y de las ONG— se constituyó como una estrategia colectiva para viabilizar la reconversión productiva.

En líneas generales, las familias campesinas han sido receptivas a las propuestas organizativas de los mediadores sociales. En parte, esto se explica por su necesidad de acceder a la “ayuda social” y porque las modalidades de organización propuestas fueron compatibles, por lo general, con las lógicas nativas de articulación comunitaria. A partir de los proyectos de esas instituciones emergieron diferentes modalidades organizativas con fines productivos (asociaciones de productores agropecuarios y grupos de artesanos) y sociales (grupos de mujeres, grupos de jóvenes, asociaciones de cooperadoras escolares y comedores comunitarios) (Cowan Ros, 2003: 112).

Otro fenómeno que contribuyó al fortalecimiento de los lazos comunitarios y a la emergencia de nuevas organizaciones sociales fue el surgimiento de un movimiento indigenista. Este hecho está relacionado con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que incluyó el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas e instruyó a los gobiernos provinciales para que otorgasen el título de propiedad comunitaria de las tierras a aquellas comunidades indígenas que lo solicitaran. En la provincia de Jujuy la entrega de los títulos fue obstaculizada con la sanción de diferentes leyes que burocrataron el proceso legal. Frente a ese hecho, las organizaciones indigenistas y algunas ONG asumieron el papel de asesorar, organizar y movilizar a las comunidades rurales para que presionaran al gobierno provincial.

Así, en los años 90 tuvo lugar un proceso de *densificación del tejido social del territorio*, es decir, se intensificaron y ampliaron los vínculos sociales. En pocos años no sólo se fortalecieron los lazos sociales tradicionales, sino que surgieron nuevas modalidades de organización impulsadas por los mediadores sociales. El fenómeno más llamativo, por novedoso, es la creciente articulación entre comunidades y/o organizaciones de base que, en algunos casos, llegaron a formalizarse en organizaciones de segundo grado o en redes sociales¹⁰ (Cowan Ros, 2005a: 327).

Es difícil expresar cuantitativamente la “densificación del tejido social”, por ser imposible contabilizar las relaciones sociales en el nivel territorial. Una estimación indirecta y parcial de ese fenómeno es la variación del número de organizaciones sociales. En un estudio realizado por el BID y el PNUD (2000: 145) en la provincia de Jujuy, se manifiesta que el 62,6% de las organizaciones de base que existían en el año 2000 habían sido creadas en el período 1990-2000. Si bien no especifica la dimensión de este fenómeno para la Puna y la Quebrada, en el trabajo de campo se observó que el proceso que ocurrió en el ámbito provincial tuvo su correlato, o incluso fue más significativo, en el territorio.

Para las familias campesinas, acceder a los recursos que se les presentan escasos a partir de su red de relaciones sociales ha significado la implementación de diferentes mecanismos. En particular destaca la articulación con agentes externos —relaciones de mediación— y con pares —asociacionismo. Con los primeros se intenta acceder a financiamiento, capacitación y/o apoyo en la gestión comercial; a través de los segundos pretenden aumentar la escala para acceder y mejorar el poder de negociación en el mercado.

Los mediadores sociales, al poseer una dotación de recursos diferente e interactuar en otros universos sociales, se convirtieron en agentes claves en la red de relaciones sociales

¹⁰ Entre las organizaciones más importantes destacan: la *Red Puna y Quebrada* creada en 1995, que articula a 30 organizaciones sociales (aproximadamente 1200 familias); la *Asociación Warmi Sayajsunqo* (Mujer Perseverante) creada en 1995, que articula a 64 comunidades de la Puna (aproximadamente, 2800 familias); la *Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles*, creada en 1996, que congrega a 140 socios; y la *Red de Comunidades Kollas*, creada en el 2000, que articula a 25 comunidades (aproximadamente 650 familias) del departamento de Yavi, Puna.

de las familias campesinas. Los políticos locales —alcaldes y concejales— regulan el acceso de las familias campesinas a los recursos del Estado —programas asistenciales, medicamentos, empleo público, etc. Los técnicos de las ONG y de los programas públicos de desarrollo rural se han convertido en el único canal de acceso al financiamiento —subsidios y/o micro-créditos. A partir de 1995, algunas organizaciones de base comenzaron a implementar estrategias con el fin de captar fondos —del gobierno nacional y de las ONG internacionales— para financiar sus emprendimientos sin la intermediación y los condicionamientos que imponen los mediadores locales.

Los campesinos que han conseguido generar excedentes productivos y comercializarlos en mercados regionales en forma sostenida son, mayoritariamente, miembros de organizaciones sociales que reciben apoyo de las ONG. A través de sus organizaciones, las familias acceden a la asistencia técnica y financiera y comercializan de forma asociativa su producción. A los fines del presente artículo, se describen sintéticamente tres experiencias que ejemplifican las lógicas implementadas por las organizaciones sociales para viabilizar la reconversión productiva de sus miembros.

Las organizaciones que integran la *Red Puna y Quebrada* llevan siete años comercializando asociativamente carne de llama y oveja. Esto lo han logrado con el apoyo técnico y financiero de una ONG que propuso aumentar los ingresos prediales a través de la venta directa en mercados regionales. En un primer momento incorporaron nuevas razas ovinas a sus majadas y cambiaron las pautas de manejo. Posteriormente, emprendieron un proyecto para comercializar la carne en el mercado municipal de San Salvador de Jujuy, capital provincial a 350 km de distancia. Esto supuso realizar negociaciones con los intendentes locales para usar sin costo el servicio de matadero y los vehículos municipales para transportar los animales. También obtuvieron un permiso del alcalde de la capital para comercializar sus productos en el mercado municipal. En la actualidad, la organización cuenta con un vehículo propio y alquila un local de venta en la capital provincial. Así, los campesinos han conseguido comercializar de forma directa su producción.

La *Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valle* lleva once años comercializando productos fruti-hortícolas. Impulsada por un técnico que trabajaba en un programa público de desarrollo rural, surgió en 1996 con el fin de incrementar la productividad y mejorar las condiciones de comercialización de sus socios. Con el apoyo económico de diferentes ONG internacionales, del Estado y del Banco Interamericano de Desarrollo creó una línea de créditos para sus socios; montó un galpón con cámara frigorífica para el acondicionamiento, selección y almacenamiento de los productos; compró un tractor para bajar el costo de labranza y vehículos para mejorar las condiciones de comercialización. Tras diferentes experiencias comerciales, la Cooperativa se centró en la venta de productos frutícolas y hortícolas en los mercados locales y en la capital provincial, y hoy comercializa diversas especies andinas, como “exquisiteces”, a intermediarios de la ciudad de Buenos Aires y a restaurantes y hoteles del territorio.

Otro emprendimiento típico es la producción y comercialización de artesanías. La organización pionera es la *Cooperativa de trabajo PUNHA*, que con apoyo financiero de una ONG internacional inició la producción y comercialización de artesanías, a fin de

generar una fuente de ingresos para sus socios. En los años 90, la Cooperativa amplió sus fuentes de financiamiento y comenzó a realizar cursos de capacitación en hilado y tejido a desocupados, en su mayoría mujeres de diferentes lugares del territorio, y a productores de ovejas para mejorar la calidad de la lana. A partir de esos cursos se formaron grupos de artesanas que pasaron a articularse verticalmente en el proceso productivo. En la Cooperativa también se fabrican telares y máquinas para hilar, con el fin de equipar y aumentar la productividad de los grupos. Las artesanas comercializan su producción a través de la Cooperativa, en diferentes puntos de venta en el territorio, en las principales ciudades del país e incluso en el extranjero.

La creación de esas y otras organizaciones con fines productivos y comerciales refleja la intencionalidad de los campesinos de fortalecer las actividades agropecuarias en sus nuevas estrategias económicas. De hecho, el asociacionismo fue un mecanismo recurrente para acceder a los recursos y al mercado. Sin embargo, la conversión del capital social al económico pocas veces se desarrolló de forma lineal; por lo general, medió la conversión al capital simbólico. En algunos casos, las organizaciones de productores debieron invertir tiempo y dinero para difundir sus proyectos, contactarse y realizar gestiones con las potenciales instituciones financieras. En otros, tuvieron que negociar con los políticos locales para mejorar sus condiciones de acceso a los mercados. En ambos casos debieron obtener el reconocimiento como colectivo social —ya sea de pequeños productores “pobres” ante las instituciones de promoción social, o como grupo de ciudadanos movilizadas ante los políticos locales— y luego conseguir apoyo —financiero o político— para viabilizar sus emprendimientos.

LÍMITES PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA

En 2005 se observó una diferenciación en las estrategias económicas de los campesinos. Por un lado, se identificaron familias que continuaron centrando su estrategia productiva en la generación y comercialización de excedentes agropecuarios o de artesanías, en otros casos, la venta de mano de obra se convirtió, nuevamente, en la principal fuente de sustento.

Pocas familias han conseguido reconvertir sus sistemas productivos. Según un estudio realizado a partir del Censo Nacional Agropecuario de 2002, el 6% de las explotaciones agropecuarias del territorio serían empresariales y el 94% de pequeños productores familiares, comprendido por el 6% *familiares capitalizados* (la producción predial posibilita la reproducción social ampliada del grupo doméstico), el 17% *campesinos* (la producción predial posibilita la reproducción simple) y el 71% restante serían *campesinos* que no pueden subsistir a partir de la producción predial y deben recurrir a la generación de ingresos extra-prediales (Obschatko y otros, 2006).

Por lo general, los *pequeños productores familiares capitalizados* son productores fruti-hortícolas que viven en zonas húmedas de la Quebrada de Humahuaca, cerca de las principales vías de comunicación y comercializan sus productos en mercados regionales. En sus planteamientos productivos se evidencian rasgos de una agricultura capitalista,

entre los que destacan los siguientes: la incorporación de tecnología, la contratación ocasional de mano de obra y el arrendamiento de tierra. En la Puna existen ganaderos, con bajo nivel de incorporación tecnológica, pero debido a la tierra y al número de cabezas que poseen, acceden a un cierto nivel de capitalización.

En el caso de los productores *campesinos* se registra una orientación de su producción hacia el mercado. No obstante, la incorporación tecnológica es incipiente y la comercialización la realizan a través de las organizaciones de productores, con apoyo de las ONG. Según estimaciones de dirigentes de las organizaciones, en 2005 el ingreso neto por la comercialización de los productos agropecuarios de una familia campesina que presenta estas características podía llegar hasta los 8.000 pesos/año; aproximadamente 670 pesos/mes.

No obstante, la mayoría de los campesinos no han conseguido reconvertir sus sistemas productivos. Aún mantienen una producción agropecuaria de subsistencia y los excedentes comercializados son reducidos, lo que les impide subsistir a partir de su producción predial. Los ingresos que obtienen por la venta de sus productos, son muy variables a lo largo del año y entre años, y de acuerdo a nuestras estimaciones, no superarían los 1.800 pesos anuales por familia, en promedio 150 \$/mes.

En junio de 2005, el INDEC (2006) estimaba el valor de la *canasta básica alimentaria por adulto* en los aglomerados urbanos del noroeste argentino (índice que delimita la línea de indigencia) en 100,75 \$/mensuales, y el de la *canasta básica total* (que mide la línea de pobreza) en 217,62 \$/mes. Si bien, estos índices no están pensados para evaluar el costo de vida en el ámbito rural, son la única referencia disponible para evidenciar las dificultades que encuentran las familias campesinas para subsistir. Si se considera que un grupo doméstico rural del territorio tiene en promedio 4,1 miembros, entre adultos y niños, se observa que sólo aquellas familias que han conseguido reconvertir sus sistemas productivos estarían en condiciones de garantizar su reproducción social a partir de la venta de sus productos agropecuarios; el resto estaría obligada a buscar otras fuentes de ingreso para garantizar la subsistencia del grupo familiar.

Los recursos provenientes de la “ayuda social” proporcionada por el Estado, se convierten en muchas familias en una fuente de ingresos necesarios para garantizar la subsistencia del grupo doméstico. En particular, destaca el programa *Jefes y Jefas de Hogar Desocupados* que, desde 2002, otorga 150\$ mensuales (1.800 \$/anuales) a los jefes de familia desempleados, a cambio de la realización de algún trabajo comunitario o la terminación de sus estudios. Otros programas asistenciales de relevancia son: i) los “bolsones de comida”, que se distribuyen mensualmente y contienen 11 Kg. de alimentos que no se producen en el territorio (su valor de mercado equivale a 25 pesos) y ii) las becas de estudio otorgadas por el Instituto Nacional de Acción Indígena (INAI), que destina 400\$ anuales por familia para estimular que los jóvenes terminen sus estudios¹¹.

¹¹ Para dimensionar la cobertura de los programas sociales se presenta el caso de la Comisión Municipal de Yavi, situada en la Puna, cuyo distrito está conformado por 12 comunidades rurales en las que viven alrededor de 360 familias. En 2002, 300 jefes de familia solicitaron ser beneficiarios del Programa *Jefes y Jefas*

La venta de mano de obra comenzó a constituirse, nuevamente, en una alternativa de generación de ingresos en 2003, a partir de la reactivación de la economía nacional, como consecuencia del cambio de política monetaria. Las posibilidades de empleo en el territorio han sido bajas, restringiéndose al empleo público y a la actividad minera. Esto ha supuesto el retorno a la emigración. A diferencia de la migración de antaño a la caña de azúcar, en la actualidad los períodos de residencia fuera de la comunidad son más cortos (de dos a cuatro meses), los destinos son diversificados (cultivos de diferentes regiones del país, complejos mineros, empresas petroleras de la Patagonia, entre otros) y varían de año a año según la demanda y el salario. La proporción de familias que tienen algún miembro que emigra también ha disminuido notablemente. Según la percepción de diferentes campesinos de las comunidades del departamento de Yavi –de fuerte vocación *cañera y migrante*– en el pasado, entre el 80% y el 90% de las familias de cada aldea tenía al menos un miembro que migraba a la cosecha de algún cultivo; actualmente ese porcentaje se encontraría entre el 20% y el 30%¹².

En 2005, el salario de los cosechadores era de 500 \$/mensuales. Un campesino que trabajaba cuatro meses en la cosecha de algún cultivo obtenía una suma semejante a la que recibía en un año un beneficiario del Programa *Jefes y Jefas*; de ese modo, el Programa se convirtió en una alternativa a la migración. Otro aspecto a destacar es que la cosecha de algunos cultivos (tabaco, vid y manzana) se realiza en verano, coincidiendo con la época de producción agrícola, lo que dificulta la consolidación de una agricultura comercial.

Diferentes factores se conjugan para explicar la opción por la venta de mano de obra como principal fuente de ingresos y la producción agropecuaria como complemento. En algunos agentes prevalece la percepción de que la venta de mano de obra genera mayor retorno económico que la producción agropecuaria. En otros casos, se apostó a la consolidación de una producción agropecuaria comercial, pero la dificultad para aumentar los excedentes comercializables obligó a las familias a buscar otras fuentes de ingresos.

Comercializar de forma sostenida en los mercados regionales, por medio del asociacionismo, ha implicado la inversión de tiempo y dinero y una mayor complejidad de las tareas administrativas, y no siempre tuvo el rédito esperado¹³. Para los campesinos, acceder a esos mercados significa incursionar en un nuevo universo social en el cual participan grandes agentes económicos (hipermercados, mayoristas, etc.), que imponen

de Hogar Desocupados. En 2005, existían 100 beneficiarios de dicho Programa, 200 recibían los *bolsones de comida* y 20 familias recibían las becas del INAI.

¹² A partir de los censos cuatrimestrales de población realizados por el servicio médico provincial se constató que, en 1997, sobre un total de 6.226 habitantes rurales de la Puna (aproximadamente el 55% de la población rural de la región), el 8% migró de su hogar a lo largo del año. En 2001, sobre un total de 323 pobladores residentes en el departamento de Yavi, sólo el 1% se ausentó de su hogar en algún momento del año. No existen datos estadísticos para los últimos años.

¹³ Según dirigentes de las organizaciones sociales el precio de venta al que acceden los campesinos comercializando en forma asociativa supera en un 10% el pagado por los intermediarios locales. Sin embargo, debido al bajo volumen comercializado, la incidencia en la economía doméstica es mínima.

una dinámica y reglas de juego particulares (precios, fechas, modalidad de pago, etc.) que desfavorecen a quien no posee la estructura de capitales necesaria para “jugar el juego” del campo económico.

La dificultad de consolidar una producción agropecuaria comercial, que posibilite la reproducción social del grupo doméstico, también se explica por el insuficiente financiamiento al que accedieron los campesinos. De hecho, los programas sociales ejecutados por el Estado estuvieron dirigidos a contener la creciente masa de excluidos que generaba el nuevo modelo económico, es decir, no formaron parte de una política agropecuaria que se propusiera la reconversión productiva de ese estrato social. Por otro lado, las políticas fiscales y bromatológicas son obstáculos difíciles de sortear para que los campesinos puedan acceder legalmente a los mercados regionales. La política fiscal, al imputar un costo fijo al producto comercializado sin diferenciar la escala de producción, hace económicamente inviables muchos emprendimientos.

A esos factores se suman otros de orden social, que explican el desempeño diferencial entre las experiencias asociativas. La constitución de las organizaciones de productores ha implicado un proceso de adquisición de confianza y de reconocimiento entre sus miembros y con los mediadores sociales. No obstante, muchas experiencias fracasaron. Las rivalidades de la vida comunitaria, la falta de tiempo para compatibilizar las labores productivas con las actividades de la organización o la dificultad para acordar objetivos comunes se convirtieron en obstáculos que muchos grupos no consiguieron superar. Es decir, las redes sociales no funcionaron solamente como colectivos solidarios; en su interior también surgieron disputas entre los agentes por la apropiación de los diferentes recursos en juego y por imponer sus visiones de mundo. En este artículo se centra el análisis en el funcionamiento de las redes sociales como cuerpo; la dimensión agonística ha sido analizada en otro trabajo (Cowan Ros, 2005b).

En un contexto de crisis, la redefinición de las estrategias implementadas por los campesinos fue eficaz para garantizar la subsistencia del grupo doméstico. Sin embargo, en la percepción de los entrevistados no fueron suficientes para garantizar el mismo nivel de vida que tenían en décadas pasadas. Existen factores estructurales y sociales que se convierten en limitantes para la consolidación de una agricultura comercial que posibilite la reproducción social ampliada del grupo doméstico. Esto se observa en la escasa capitalización que han logrado las familias y en la dificultad que tienen para mantener sus emprendimientos comerciales sin apoyo externo.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SIMBÓLICA

La redefinición de las estrategias de inversión económica ha impactado y reconfigurado el sistema de estrategias de reproducción social campesina, manifestándose con especial énfasis en las de inversión simbólica. Una de las manifestaciones de ese fenómeno es la reivindicación por los campesinos de nuevas identidades y de los derechos que se le atribuyen.

El acto de nombrar tiene el poder simbólico de transformar la visión de mundo, o sea, las categorías de percepción y de apreciación que constituyen los principios de construcción del mundo social, y con éstas la definición de lo que es importante y merece ser representado (Bourdieu, 1990: 176). Identidades que históricamente fueron estigmatizadas o desvalorizadas, como las referidas a la etnicidad —*indígena, aborígen y kolla*— y a las actividades campesinas tradicionales —*pequeño productor agropecuario y artesano*—, comienzan a ser reivindicadas por las familias campesinas en los nombres que dan a sus organizaciones sociales y en sus movilizaciones y reclamos ante representantes políticos e instituciones de promoción social. Se presentan como un repertorio de categorías identitarias que son accionadas según sea el interlocutor y adquieren un significado político, pues hacen referencia a un grupo o clase social movilizadora en pro de un reclamo. Así, se pretende dar visibilidad pública a categorías sociales que históricamente fueron ignoradas por las políticas gubernamentales.

La cuestión indígena, es decir, el debate en torno a la revalorización de las pautas culturales originarias del territorio y el reconocimiento de los derechos de los nativos, adquirió notoriedad pública con la reforma constitucional. Autorreconocerse como aborígenes supone dar existencia en el territorio a una categoría social, la de *pueblos originarios*, a los que la Constitución Nacional otorga el derecho a la propiedad comunitaria de las tierras. Éste ha sido el principal tema de movilización en los últimos años.

La lucha por obtener el título de propiedad de las tierras forma parte de las estrategias de sucesión y económicas de las familias, pues si bien hasta ahora el derecho al uso de las tierras comunitarias ha sido consuetudinario, éste sólo rige en el ámbito comunitario, perdiendo eficacia ante las instituciones legales, para las cuales es el título de propiedad el que otorga tal derecho. Prácticamente la totalidad de las comunidades rurales han cumplido con los requisitos legales para la obtención del título de propiedad: adquisición de la personalidad jurídica de organización comunitaria aborígen, demarcación de tierras y solicitud del título. Es decir, se han movilizado como colectivo social —acumulación de capital social— para obtener el reconocimiento por parte de las instituciones públicas —su conversión en capital simbólico.

En 2005, en el marco de una campaña electoral, se entregaron los primeros trece títulos de propiedad comunal. Sin embargo, centenas de comunidades aún los aguardan, y denuncian la irregularidad de la situación. El escepticismo está presente entre varios dirigentes indígenas, los cuales argumentan que en un contexto de reactivación económica, los intereses fundiarios de las empresas mineras entran en contradicción con sus reivindicaciones.

Reconocerse como aborígenes también los convierte en “población objetivo” de las políticas de promoción social que ejecuta el INAI. En los últimos años, este organismo ha destinado diferentes líneas de financiamiento para proyectos productivos, de infraestructura comunitaria y becas educativas, que las familias reciben por intermedio de sus organizaciones y los incorporan a sus estrategias económicas.

Asumir una identidad étnica, antes negada por estigmatizada, en un contexto jurídico y político favorable puede ser interpretado como un uso instrumental de las categorías iden-

titarias. Y es probable que esto explique, en parte, los motivos que dispusieron a muchos nativos a reivindicar esas identidades. Sin embargo, una vez accionadas, nuevos debates en torno a qué es ser *aborigeno kolla* surgieron en el seno de las organizaciones sociales y con ellos se están redefiniendo el sentido y la apropiación de esas identidades.

Al reivindicarse como *aborígenes* los nativos pasan a identificarse positivamente con la cultura originaria, recuperando, aunque de manera resignificada, una serie de elementos y prácticas culturales originarias del territorio. En esa reivindicación está en juego dejar de concebir la cultura nativa como un resquicio del pasado, una pieza de museo, o sea, una cultura muerta que, como mucho, es valorizada como atracción turística, que es el papel que se le reservó en la cosmovisión dominante, la occidental. En contraposición, se plantea asumirla como una cultura vigente y dinámica, que tiene un papel vital en el “progreso” del territorio y, por tanto, debe estar contemplada en las políticas públicas.

Los dirigentes indigenistas, cuando hablan desde su papel de promotores del desarrollo, frecuentemente accionan la identidad indígena para diferenciarse de los “otros” mediadores sociales, es decir, los técnicos de las ONG y programas públicos que mayoritariamente son foráneos. En esa distinción, *lo indígena* es asociado a lo originario del territorio que, como tal, conoce no solo las problemáticas locales sino que está comprometido con su resolución definitiva, por ser su lugar de origen. En contraposición, *lo foráneo* sería portador de la cultura externa, la dominante, que viene con propuestas que no se corresponden con los intereses locales. En esa visión, están en juego diferentes concepciones de lo que significa el “progreso” en el territorio y una disputa entre los mediadores —nativos y foráneos— por ser los destinatarios de los recursos para la promoción social.

Las identidades construidas a partir de las actividades productivas tradicionales del campesino, es decir, las de productores de mercaderías, están adquiriendo un peso significativo en el ámbito rural del territorio. En el pasado, muchos nativos eran productores agropecuarios; sin embargo, frecuentemente solían identificarse como *cañeros* o *mineros*, o sea, como vendedores de mano de obra, identidad que a su vez estaba asociada a una de las funciones atribuida al territorio, la de (re)productor de mano de obra. En la actualidad, al reconocerse y reivindicarse como *productores agropecuarios*, *artesanos* o *campesinos*, estos agentes asumen una “nueva” identidad profesional y a su vez (re)definen la del territorio.

Un aspecto a considerar es que las categorías de *pequeños productores* y la de *campesinos* no son tradicionales del territorio. La primera es una terminología que surge a fines de los años 80, junto a los programas de desarrollo rural, y forma parte del sistema de clasificación de los productores rurales que define los tipos sociales susceptibles de ser beneficiarios. Esta forma de “ser vistos” y de ser considerados como potenciales beneficiarios de las políticas públicas, predispuso a los nativos a asumir esa identidad para captar el apoyo de las instituciones de promoción social.

La categoría *campesino* ha comenzado a ser accionada por algunas organizaciones sociales que reciben apoyo de ONG’s que privilegian la organización política como forma de concretar un cambio social. Los técnicos, con la introducción de esa categoría identitaria

procuran generar en sus beneficiarios un proceso de objetivación del mundo social y su autorreconocimiento como clase social marginada.

Eso fue puesto en evidencia en una manifestación pública realizada en noviembre de 2003 por la *Red Puna y Quebrada* en la capital provincial. Fue la primera vez que familias rurales del territorio se movilizaron en la capital provincial, reivindicándose como “campesinos”. Con la consigna “*Queremos dejar de sobrevivir, queremos vivir con dignidad en nuestra tierra*”, se manifestaron frente a la sede de gobierno para reclamar la ejecución de políticas públicas que promuevan la producción agropecuaria y artesanal en el territorio, y de políticas educativas y sanitarias que contemplen su especificidad cultural.

Reivindicar el proyecto de vivir como productores familiares en su lugar de origen implica rechazar el papel que históricamente se atribuyó a los nativos, el de vendedores de mano de obra, el de emigrantes. La concreción de ese proyecto supone revertir la marginación del territorio de las políticas públicas. Así, en el ámbito provincial, se ha trabado una lucha simbólica por reconocer que los habitantes del territorio pueden asumir otro papel social, el de productores de alimentos y artesanías.

La creciente organización social de los campesinos, al igual que el esfuerzo de los dirigentes por “politizar” e incluir en la agenda pública sus intereses de clase, evidencia el papel relevante que tienen las estrategias de inversión simbólica en el sistema de estrategias de reproducción social de las familias campesinas. La reconversión de sus sistemas productivos está condicionada por las reglas de juego, en especial las que imponen las instituciones públicas y el mercado. Sin embargo, estar en condiciones para cambiar las reglas de juego implica ser reconocido socialmente como un actor legítimo para participar e influir en las decisiones públicas, es decir, supone la acumulación de reconocimiento social —poder simbólico— para ocupar una posición privilegiada en la definición del mundo social y, de ese modo, crear el contexto más favorable para su reproducción social.

CONCLUSIONES

El debate sobre la desaparición o persistencia del campesinado ha perdido relevancia. Sin embargo, aún resta comprender a través de qué lógicas, esa formación social consigue reproducirse e integrarse a una sociedad que los oprime y que se transforma al tiempo que se profundizan las relaciones capitalistas de producción.

A diferencia de otras sociedades donde se delegó en el campesinado la producción de alimentos baratos para el proletariado urbano, en el caso analizado su funcionalidad se basó en la (re)producción de mano de obra barata para el desarrollo industrial. No obstante, el cambio del modelo económico en los últimos años supuso una (¿temporaria?) prescindibilidad de esa fuerza de trabajo. En esa coyuntura, las familias campesinas han intentado reconvertir sus sistemas agropecuarios de subsistencia en comerciales para garantizar su reproducción social. En algunos casos, ha sido una estrategia de subsistencia a la espera de que el mercado de trabajo vuelva a demandar su mano de obra; en

otros, significó un intento por redefinir la forma de integración con la sociedad, buscando convertirse en productores de alimentos. Ambas estrategias han tenido por común denominador, la intensificación de la pluriactividad. Entendemos que esa estrategia ha sido fundamental para garantizar la subsistencia del grupo doméstico campesino, en la transición de un modelo económico a otro. En este artículo se ha omitido intencionalmente la referencia a procesos de “campesinización” y “descampesinización”, por entenderse que la diferente combinación de actividades agropecuarias y no agropecuarias, en cada coyuntura, forma parte de la especificidad del campesinado analizado. Este es uno de los factores que explica su persistencia como formación social.

Otro elemento a considerar es el papel desempeñado por el Estado: en el pasado promovió la incorporación del campesinado al mercado de trabajo en el contexto del desarrollo industrial. En la actualidad, parecería que a través de la “ayuda social” busca garantizar la supervivencia de las familias campesinas en su lugar de origen, descomprimiendo los conflictos sociales que emergieron en las ciudades como consecuencia de la exclusión social generada por las políticas neoliberales. En ambos casos, el Estado ha favorecido la reproducción social del campesinado en condiciones de subordinación al resto de la economía nacional.

Sería apresurado afirmar que los campesinos *puneños* y *quebradeños* han perdido su funcionalidad como mano de obra barata para el resto de la economía, pues la reactivación económica de los últimos años está reabsorbiendo lentamente parte de esa “reserva de fuerza de trabajo”. La expansión de una agricultura comercial en el territorio también se presenta improbable, de no mediar la decisión del gobierno de generar políticas que atiendan la especificidad de ese sector. Sin duda la subsistencia de ese campesinado seguirá basándose en un sistema de estrategias, que funda su eficacia en la complementación de las estrategias económicas y simbólicas. El accionar político de los campesinos tendrá un papel crucial en la redefinición (o no) del contexto en el que se desarrollan sus emprendimientos productivos y en la modalidad de integración con el resto de la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARZENO, M. y H. CASTRO (1998), “Agricultura y modernización en la Quebrada de Humahuaca”, en *Jornadas de Estudios Agrarios Horacio Giberti*, Buenos Aires, FFyL, UBA.
- BID y PNUD (2000), *Índice de desarrollo de la sociedad civil de Argentina*, Buenos Aires, Edilab.
- BOURDIEU, P. (1986), “The forms of capital”, en Richardson (editor), *Handbook of theory and research for the sociology of education*, Greenwood Press, pp. 241-260.
- (1990), *Coisas ditas*, São Paulo, Brasiliense.
- (1994), “Stratégies de reproduction et modes de domination”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n.º 105, pp. 3-12.

- (1995), "Habitús, illusio y racionalidad", en Bourdieu y Wacquant. *Respuestas, por una antropología reflexiva*, México, Grijalbo, pp. 79-99.
- COWAN ROS, C. (1999), *ONG's de desarrollo rural: dimensión y estrategias en la Argentina de fin de siglo* [tesina de grado], Buenos Aires, UBA.
- (2002), "ONG's de desarrollo rural: estructura, dimensión y estrategias ante el nuevo siglo", en Benencia y Flood (comp.) *Ong's y Estado: experiencias de organización rural en Argentina*, Buenos Aires, La Colmena, pp. 41-64.
- (2003), *Capital social e luta simbólica. O caso da Red Puna: uma experiência territorial de articulação social na província de Jujuy, Argentina*. [tesis de maestría], Porto Alegre, PGDR-UFRGS, [<http://www.ufrgs.br/pgdr/dissertacoes/mestradopgdr/dissertacoespubmpgdr.htm>]
- (2005a), "Transformaciones sociales, crisis y resistencia en las tierras altas jujeñas: el caso de la Red Puna", en Benencia y Flood (comp.), *Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en la Argentina de los noventa*, Buenos Aires, CEDERU y La Colmena, pp. 315-345.
- (2005b), "Mediação social e conflito: lógicas de articulação entre técnicos de uma ONG de promoção social e famílias camponesas, nas "terras altas jujeñas", Montevideo, *Memórias de la IV Reunión de Antropología del Mercosur*, formato digital.
- (2006), *Lógicas de articulação com o sistema político-institucional dos camponeses da comissão municipal de Yavi, Província de Jujuy, Argentina*, [cualificación de doctorado] Rio de Janeiro, Pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas ao Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, UFRRJ.
- FRIEDMANN, H. (1978), "World Market, State and Family Farm: social bases of household production in the era of wage labour", *Comparative Studies in Society and History*, vol. 20, n.º 4, pp. 545-586.
- GOODMAN, D., B. SORJ y J. WILKINSON (1990), *Da lavoura as biotecnologias*, Rio de Janeiro, Campus.
- INDEC (2006) *Censo Nacional de Población*, [<http://www.indec.mecon.gov.ar>] [acceso: enero de 2006].
- ISLA, A. (1992), "Dos regiones, un origen. Entre el silencio y la furia", en Isla Alejandro (comp.), *Sociedad y articulación en las tierras altas jujeñas: crisis terminal de un modelo de desarrollo*, Buenos Aires, ECIRA, ASAL y MLAL, pp. 169-215.
- KARASIK, G. (1984), "Intercambio tradicional en la puna jujeña", *Revista Runa*, n.º 14, pp. 51- 91.
- KINDGARD, F. (1987), "Mineros y conflicto social en los Andes argentinos", en *Seminario Dinámicas de estructura agrarias regionales: investigaciones y proyectos*, Tilcara, Jujuy [mimeo].
- MADRAZO, G. (1981), "Comercio interétnico y trueque recíproco equilibrado intraétnico. Su vigencia en la Puna argentina y áreas próximas, desde la independencia nacional hasta mediados del siglo XX", *Desarrollo Económico*, v. 21, n.º 82, pp. 213-230.
- MANN, S. (1990), *Agrarian capitalism in theory and practice*, Chapel Hill y Londres, The University of North Carolina Press.

- NEIMAN, G. y C. CRAVIOTTI (2005), *Entre el Campo y la Ciudad: desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro*, Buenos Aires, CICCUS.
- OBSTCHATKO, E., P. FOTI y M. ROMAN (2006), *Los pequeños productores en la Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002*, Buenos Aires, IICA-SAGPyA.
- REBORATTI, C. (1997), "Estructura y crisis del mundo campesino del noroeste argentino", en *International Annual Studies Conference: Ciudad y campo en América Latina*, Osaka, pp. 219-234.
- RUTLEDGE, I. (1987), *Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy 1550-1960*, Buenos Aires, ECIRA, FFyL, CICSO, UBA y MLAL.
- SACCO DOS ANJOS, F. (2001), Agricultura Familiar, Pluriactividad y desarrollo rural en el Sur de Brasil. *Revista Internacional de Sociología*, n.º 28, pp. 173-205.
- (2003), *Agricultura Familiar, Pluriatividade e Desenvolvimento rural no Sul do Brasil*. Pelotas, Editora e Gráfica da Universidade Federal de Pelotas.
- SCHNEIDER, S. (2003), *A pluriatividade na agricultura familiar*, Porto Alegre, UFRGS.
- SERVOLIN, C. (1989), *L'Agriculture Moderne*, Paris, Éditions du Seuil.
- SHANIN, T. (1980), "A definição de camponês: conceituações e desconceituações —o velho e o novo em uma discussão marxista", *Estudos CEBRAP*, n.º 26, pp. 41–80.

RECIBIDO: 10/03/06
ACEPTADO: 3/07/08